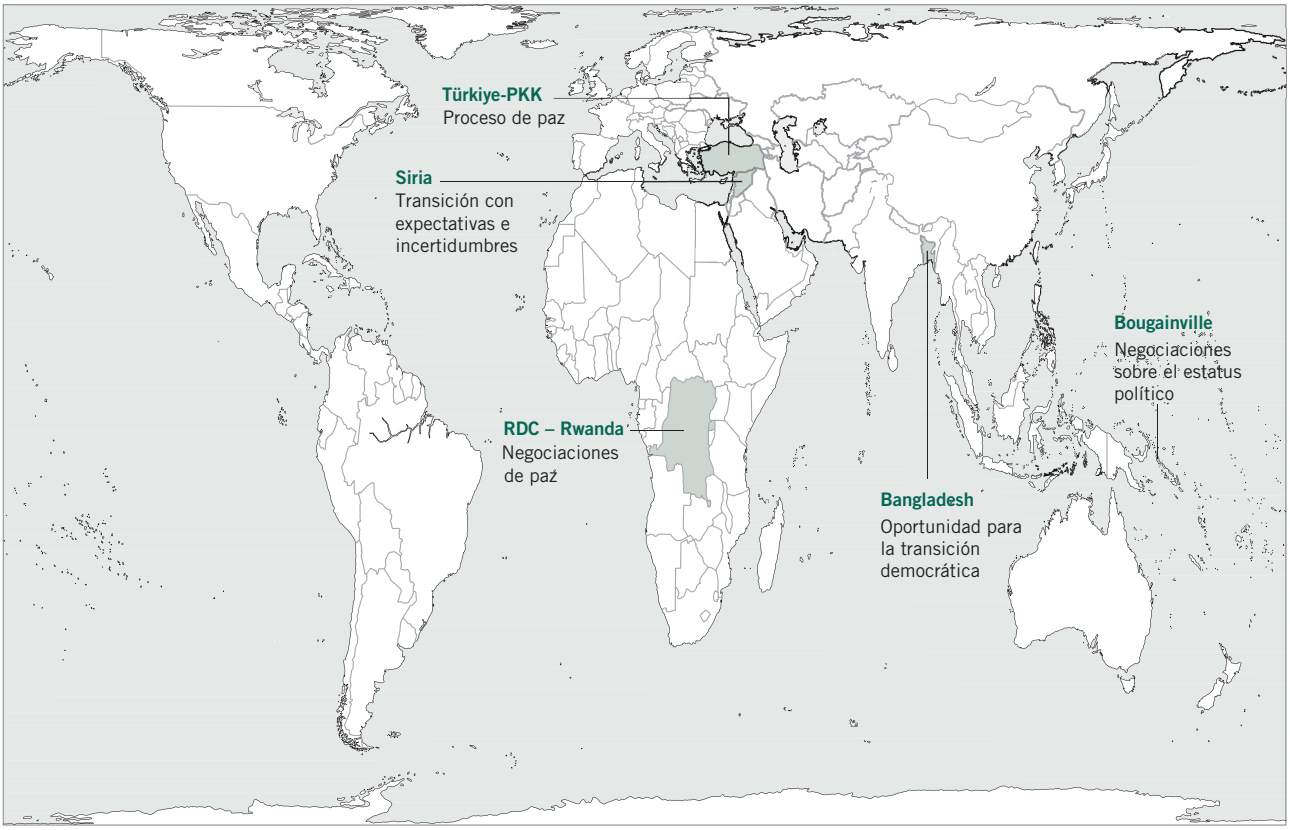
# 4. Oportunidades de paz

Tras analizar el año 2024 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades de paz identificadas hacen referencia a las negociaciones entre RDC y Rwanda que podrían contribuir a resolver uno de los conflictos más prolongados en África; a las posibilidades de una transición democrática en Bangladesh después de la severa crisis política que atravesó el país en 2024; a las negociaciones sobre el estatus político de la isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea; al nuevo diálogo entre Türkiye y el grupo armado kurdo PKK; y a las perspectivas de la nueva etapa histórica en Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. **Oportunidades de paz**




1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2024 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2025.

## 4.1. Una nueva oportunidad para la paz entre la República Democrática del Congo y Rwanda

La actual coyuntura diplomática en la región de los Grandes Lagos africanos presenta una nueva oportunidad de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Rwanda, dos países cuyas relaciones han estado marcadas por décadas de violencia, desconfianza mutua y profundas heridas históricas. Tras años de fracasos diplomáticos y avances militares del grupo armado M23 –respaldado por Kigali, según la ONU, EEUU y la UE, entre otros–, **las recientes negociaciones en Doha y Washington han abierto una ventana de oportunidad que podría transformar el conflicto prolongado del este de la RDC**. El 18 de marzo, los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame, con la mediación del emir de Qatar, firmaron una declaración conjunta en Doha en la que llamaban a un alto el fuego inmediato. Poco después, el 25 de abril, los ministros de Exteriores de ambos países firmaron en Washington una "declaración de principios" bajo los auspicios de EEUU, comprometiéndose a redactar un acuerdo de paz antes del 2 de mayo, aunque cumplida esta fecha no se había alcanzado. Aunque los enfrentamientos persisten sobre el terreno y los actores involucrados han violado repetidamente treguas previas, estos pasos representan un nuevo impulso para resolver uno de los conflictos más prolongados y devastadores de África.

***Las recientes negociaciones entre la RDC y Rwanda en Doha y Washington han abierto una ventana de oportunidad que podría transformar el conflicto prolongado del este de la RDC***

Sin embargo, para que esta oportunidad de paz sea sostenible y no otro intento fallido, resulta imprescindible hacer frente a las causas profundas que se encuentran en la génesis de este conflicto. No basta con acordar ceses al fuego o establecer negociaciones formales si no se abordan los factores históricos, sociales, económicos y políticos que han convertido el este de la RDC en un escenario recurrente de guerra. Uno de ellos es la cuestión de la propiedad y el uso de la tierra. Las disputas por tierras, agravadas por los desplazamientos forzados y la colonización informal de territorios abandonados, han sido sistemáticamente explotadas por grupos armados que instrumentalizan estas tensiones para reclutar combatientes y legitimar su violencia como una forma de defensa comunitaria. En paralelo, aunque los recursos naturales no explican por sí solos el origen del conflicto, su existencia ha contribuido a consolidar y perpetuar el statu quo de violencia e inestabilidad. El este de la RDC alberga vastas reservas de minerales estratégicos –como el coltán, el cobalto, el oro o el estaño–, altamente demandados por las industrias tecnológicas y energéticas globales, cuestión que ha despertado el interés de EEUU en facilitar iniciativas de diálogo entre las partes enfrentadas en los últimos años y se esperaba un acuerdo entre ambos Gobiernos sobre el acceso a estos recursos minerales. Estos recursos han sido una fuente de financiación tanto para grupos armados como para redes de corrupción institucional, creando un ciclo perverso en el que el control territorial se traduce en poder económico. La explotación ilícita de minerales, a menudo con la complicidad de actores estatales y empresas internacionales, ha generado incentivos para prolongar el conflicto y ha reforzado una economía de guerra que excluye a las comunidades locales de los beneficios derivados de sus propios recursos.

Otro elemento fundamental en la génesis y persistencia del conflicto es la instrumentalización de las diferencias étnicas. Si bien las identidades étnicas por sí mismas no son la causa de la guerra, en el caso de la RDC, las élites políticas, los grupos armados y los intereses externos han utilizado las divisiones étnicas como herramienta de movilización y de manipulación social. La comunidad tutsi congolesa, los banyamulenge, ha sido históricamente marginada y estigmatizada, lo que ha llevado a ciertos sectores a reivindicar su protección mediante las armas. El M23 se presenta como defensor de esta comunidad, cuyos miembros denuncian discriminación y violencia sistemática. En este contexto, el genocidio de 1994 en Rwanda y la posterior creación de las FDLR –grupo armado fundado por antiguos responsables del genocidio refugiados en RDC– han alimentado una narrativa de amenazas existenciales que tanto Kigali como sus opositores han explotado para justificar su acción militar.

La debilidad crónica del Estado congolés, particularmente en sus instituciones de seguridad, justicia y gobernanza territorial, ha contribuido a mantener una situación en la que más de cien grupos armados operan con impunidad en el este del país. El Estado, lejos de representar una figura neutral o garante de derechos, ha sido percibido como ausente, parcial o incluso cómplice de ciertos actores armados. Esta falta de legitimidad institucional ha generado un vacío de poder ocupado por actores no estatales, y ha permitido que la violencia se convierta en un mecanismo habitual para resolver disputas y obtener beneficios. Los sucesivos gobiernos de Kinshasa han utilizado el conflicto como una herramienta de gestión del poder, mostrando escasa voluntad de implementar reformas estructurales que pudieran reducir las causas del conflicto.

Los procesos de paz impulsados hasta la fecha han fracasado en buena parte por reproducir estas

dinámicas. Los acuerdos de Pretoria, los pactos de 2009 tras la rebelión del CNDP, y los más recientes procesos de Luanda y Nairobi, han estado marcados por una lógica de negociación entre élites políticas y militares, sin participación significativa de la sociedad civil, las comunidades afectadas, las mujeres o los jóvenes. Estas iniciativas, además, han carecido de mecanismos creíbles de implementación y seguimiento. La mayoría de los acuerdos se han basado en la buena voluntad de las partes sin establecer sanciones claras ante su incumplimiento. Como resultado, los compromisos han sido violados de forma sistemática, alimentando una cultura de impunidad y desconfianza. A esto se suma el fracaso del programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Miles de excombatientes han terminado reingresando en grupos armados, alimentando un círculo vicioso de violencia. La reforma del sector de seguridad ha sido igualmente deficiente, manteniendo a las Fuerzas Armadas divididas, mal equipadas y, en muchas ocasiones, involucradas en violaciones graves de derechos humanos.

En este contexto, los esfuerzos diplomáticos recientes ofrecen una posibilidad real de cambio. La mediación de Qatar y el impulso estadounidense han introducido un nuevo dinamismo, alejándose de los procesos regionales anteriores que habían perdido credibilidad. La reunión entre Tshisekedi y Kagame en Doha supuso el primer contacto directo entre ambos mandatarios en tres años. Posteriormente, el compromiso firmado en Washington comprometió a ambas partes a cesar su apoyo a grupos armados y a respetar mutuamente su soberanía, lo cual sienta las bases para un acuerdo más amplio.

**No obstante, esta nueva oportunidad también presenta riesgos considerables. El primero es el profundo déficit de confianza entre las partes.** Desde el inicio de la ofensiva del M23 a finales de 2021, se han alcanzado al menos seis treguas que colapsaron en cuestión de días o semanas. Las acusaciones cruzadas de incumplimientos y el uso de sanciones internacionales –como las impuestas por la UE a líderes del M23 y altos funcionarios rwandeses– han añadido tensión a unas negociaciones ya frágiles. El M23, por ejemplo, se negó a participar en una reunión en Angola tras conocer dichas sanciones, alegando que estas socavaban la posibilidad de diálogo. A ello se suma el complejo escenario político interno en la RDC. La reaparición del expresidente Joseph Kabila, acusado de mantener vínculos con el M23, ha generado divisiones en el seno del Gobierno. La detención de altos cargos de su administración, el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y su visita a Goma han intensificado las sospechas y la polarización política. Esta fragmentación podría minar la capacidad del Gobierno de Tshisekedi para implementar eventuales acuerdos y debilitar su posición frente a las demandas del M23.

Por su parte, Rwanda sigue negando cualquier apoyo al M23, a pesar de que informes de Naciones Unidas han documentado la presencia de entre 4.000 y 7.000 soldados rwandeses en territorio congolés. La falta de sanciones efectivas contra Kigali y la ambigüedad de algunos actores internacionales han permitido que el statu quo persista. El peso simbólico del genocidio de 1994 y el sentimiento de culpa de Occidente frente a su inacción histórica siguen frenando una política más firme hacia el Gobierno de Paul Kagame.

Aun así, el proceso de paz en marcha podría marcar un punto de inflexión si se construye sobre bases sólidas. Para ello, deberá ser inclusivo –incorporando a la sociedad civil, comunidades locales y mujeres–, abordar las causas estructurales del conflicto –como la propiedad de la tierra, la marginalización étnica, la debilidad institucional y la explotación ilegal de recursos–, y establecer mecanismos creíbles de implementación, verificación y rendición de cuentas. Asimismo, será esencial mantener la presión internacional y garantizar que los incentivos económicos vinculados al proceso –como la inversión en minería e infraestructuras– beneficien a las poblaciones locales y no perpetúen nuevas formas de saqueo.

En conclusión, el proceso de paz entre la RDC y Rwanda representa una oportunidad histórica para romper con décadas de conflicto cíclico, procesos fallidos y promesas incumplidas. A diferencia de esfuerzos anteriores, esta vez convergen una mayor presión internacional y un posible interés geopolítico por estabilizar una región clave para los flujos globales de minerales estratégicos. No será un camino fácil ni lineal. La fragilidad política, la desconfianza mutua y la complejidad del conflicto auguran obstáculos importantes.

## 4.2. La crisis política de Bangladesh, una oportunidad de transición

**La crisis política que atravesó Bangladesh durante 2024 abrió la oportunidad de una transición política de carácter democrático, como consecuencia de la caída del Gobierno de la líder de la Liga Awami, Sheik Hasina, y la conformación de un Gobierno interino que liderará el país hasta las próximas elecciones.** El país, potencia de la industria textil internacional, pero en el que paradójicamente la población no goza de oportunidades de trabajo con garantías de respeto a los derechos laborales, especialmente para la población más joven, atravesó un periodo en 2024 de intensas protestas sociales como consecuencia del descontento social con la situación política y económica del país. La magnitud de las protestas forzó la dimisión de la primera ministra, que además tuvo que abandonar el país y exiliarse en la India, fruto de las acusaciones de corrupción y de uso excesivo de la fuerza en la respuesta a la contestación social en las calles del país, especialmente en la capital. En el marco de las manifestaciones de protesta y en un contexto de fuerte represión policial, se produjo la muerte de 1.400 personas según Naciones Unidas, dando lugar a una de las mayores crisis políticas del país de las últimas décadas.

***Más de 1.400 personas murieron en las mayores protestas contra el Gobierno de las últimas décadas***

El desencadenante de las protestas fue la negativa del movimiento estudiantil a aceptar la reinstauración por parte de la Corte Suprema del país de un sistema de cuotas que reservaba y adjudicaba el 30% de las plazas de funcionariado a los descendientes de quienes participaron activamente en la llamada Guerra de Liberación de Bangladesh, como se conoce al conflicto que derivó en la independencia del país de Pakistán en 1971. Tras la partición del subcontinente indio y la proclamación de la independencia de India y Pakistán, este último quedó dividido entre su parte oriental y occidental. Bangladesh surge como país independiente fruto de este nuevo proceso de división formal del hasta entonces territorio pakistaní. El descontento estudiantil que dio lugar a la crisis de 2024 hunde sus raíces en la falta de mejoras en las condiciones de trabajo y la precarización del mercado laboral para los estudiantes universitarios. El importante crecimiento económico resultado de la expansión de la industria textil bangladeshí –uno de los principales abastecedores del mercado textil internacional– no ha derivado en una mejora de las oportunidades de trabajo para los estudiantes universitarios, puesto que las trabajadoras de esta industria son fundamentalmente mujeres con sueldos muy reducidos y condiciones de trabajo muy precarias. La cuota objeto de la disputa era percibida por amplios sectores de la población civil, y especialmente los estudiantes, como una herramienta de consolidación del poder político por parte de la primera ministra y la reclamación de su eliminación se convirtió en el lema central de las protestas inicialmente.

La actitud despectiva de la primera ministra frente a las organizaciones de estudiantes –que llegó a calificarles de ser los descendientes de los colaboracionistas con Pakistán en la independencia–, unida a los ataques violentos por parte de organizaciones próximas al Gobierno y el cierre de todos los centros educativos llevaron a una escalada en la protesta. Si bien las manifestaciones habían tenido un carácter pacífico inicialmente, su enorme crecimiento tras las polémicas declaraciones de la primera ministra fue respondido por las autoridades con un aumento de la represión policial, lo que ocasionó la muerte de 20 estudiantes el 18 de julio. Estos acontecimientos forzaron el inicio de negociaciones con el Gobierno el 19 de julio y dos días después la Corte Suprema redujo la cuota al 7%. Sin embargo, las protestas persistieron y fueron aumentando con la participación de otros sectores de la sociedad civil. A principios de agosto se reanudaron los enfrentamientos entre policía y manifestantes y el 3 de agosto el movimiento estudiantil señaló que su única demanda era la dimisión de la primera ministra Hasina. Las manifestaciones congregaron a cientos de miles de personas en la capital el 5 de agosto, en la conocida como "marcha a Dhaka". El jefe de las Fuerzas Armadas se negó a actuar contra los manifestantes con más contundencia, forzando la dimisión y posterior abandono del país por parte de Hasina, que se refugió en la India.

La salida de Hasina de Bangladesh abrió una oportunidad en el país en clave de democratización y diálogo entre diferentes actores políticos y sociales del país. Tras la marcha de la hasta entonces primera ministra, el presidente Muhammad Shahabuddin Chuppu disolvió el Parlamento, permitiendo así que avanzara el diálogo y fruto de las negociaciones entre el presidente, las Fuerzas Armadas y representantes estudiantiles se logró un acuerdo para un Gobierno interino encabezado por el economista y Premio Nobel Muhammad Yunus, personalidad de reconocido prestigio local e internacional. El nuevo Ejecutivo tenía el encargo de liderar el país para que pudieran convocarse nuevos comicios, que según la Constitución deberían tener lugar 90 días después de la disolución del Parlamento. El nuevo Gobierno interino –que incluyó en sus cargos a algunos representantes estudiantiles– se comprometió

con una agenda de reformas económicas, electorales judiciales y mediáticas, aunque limitada por el mandato interino. Así, se sustituyó al Jefe de la Corte Suprema y al Gobernador del Banco de Bangladesh y el país se adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En paralelo, en los meses siguientes a la conformación del Gobierno interino se produjeron detenciones de miembros del Gobierno de Hasina, incluyendo varios antiguos ministros. Asimismo, Hasina fue acusada junto a su familia de haberse apropiado de 5.000 millones de dólares destinados a infraestructuras, así como de desapariciones y tortura sistemática en centros de detención secretos y el Gobierno inició el proceso para pedir su extradición a la India.

Si bien en los meses posteriores persistió la tensión política en el país, el anuncio de Yunus de un calendario electoral con una previsión de que las elecciones tendrían lugar entre diciembre de 2025 y junio de 2026, unido al apoyo del jefe de las Fuerzas Armadas, quien señaló que respaldaban al Gobierno interino y se mantendrían al margen de la política, apuntando a un periodo de transición de 18 meses, sirvió para contener una nueva crisis. No obstante, el gobierno interino deberá hacer frente a múltiples retos en este nuevo periodo preelectoral para garantizar una transición razonablemente exitosa que permita consolidar algunas de las propuestas de reforma. Algunos de los obstáculos tienen que ver con los propios actores protagonistas de la transición política, puesto que una vez cesado el Gobierno de Hasina el protagonismo político pasó a manos del hasta entonces principal partido de la oposición, el BNP, cuya trayectoria al frente de Gobiernos anteriores de Bangladesh también adolecía de conductas autoritarias. Si bien el Gobierno interino logró impedir que se agravara la crisis económica que atraviesa del país y que en parte motivó las protestas, tanto el Gobierno interino como el nuevo Ejecutivo deberán hacer frente con la mayor urgencia a esta situación para impedir un mayor deterioro de las precarias condiciones de vida de una gran parte de la población del país.

Otro de los retos que deberá abordar el Gobierno surgido de las urnas será las relaciones con los países vecinos, especialmente con India y Myanmar. En el caso de India, este país fue uno de los principales sustentos del Ejecutivo de Hasina y así es percibido por amplios sectores de la población. La tensión entre ambos países ha ido en aumento desde el cambio de gobierno. Sin embargo, su carácter de potencia regional hace imprescindible que Bangladesh cuide las relaciones con India, dadas las implicaciones políticas y económicas que este contacto tiene para el futuro del país. Al mismo tiempo, el deterioro en la situación de violencia de Myanmar podría tener graves consecuencias, especialmente por la escalada de la violencia en el estado Rakhine, puesto que Bangladesh ya es país de acogida de centenares de miles de personas refugiadas rohingya procedentes de esta zona de Myanmar.

Las expectativas a las que debe hacer frente tanto el Gobierno interino como el nuevo Ejecutivo que emerja de las urnas son elevadas, dado el enorme deseo de cambio político y económico en amplios sectores de la población, especialmente entre la juventud. Se abre una oportunidad de profundización en la democracia así como de mayor justicia económica para una población que ha permanecido al margen de los beneficios que la expansión de la industria textil en el país ha generado, y que también ha tenido graves impactos medioambientales, especialmente en la contaminación de agua y emisiones tóxicas. Así pues, los nuevos Gobiernos deberán priorizar una transición inclusiva con garantías de pluralismo político, que siente las bases para las reformas legales, constitucionales y económicas y para la mejora de las relaciones con los países vecinos, desde un enfoque de garantía de derechos para la población bangladeshí.

## 4.3. Las negociaciones acerca del estatus político de la isla de Bougainville

**En 2024 y en los primeros meses de 2025 se produjeron una serie de circunstancias que podrían acelerar el proceso de negociación entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville para determinar el estatus político de la isla de Bougainville.** Tras el referéndum de autodeterminación de 2019, en el que un 97,7% de la población de Bougainville votó a favor de la independencia, en los siguientes cinco años el diálogo entre ambos gobiernos ha visto obstaculizado por la irrupción de la pandemia de la COVID19 y también por desacuerdos políticos de fondo y también de orden metodológico y procedimental sobre la propia negociación y validación de los resultados del referéndum. La ralentización y en muchos momentos parálisis del diálogo provocó no solamente críticas y acusaciones cruzadas entre las partes, sino también el surgimiento de voces que alertaban sobre un posible incremento de la tensión y la conflictividad en Bougainville. En marzo de 2025, ante representantes de la comunidad internacional, el propio primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en 2025 se hizo eco de la posible circulación de armas en la isla e interpeló asertivamente sobre tal cuestión a Naciones Unidas, que en su momento lideró el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes. Cabe recordar que Bougainville vivió un conflicto armado (1988-98) entre las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea y el grupo armado de oposición Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA, por sus siglas en inglés) en el que se estima que murió aproximadamente un 10% de la población de la isla. El propio presidente de Bougainville, Ishmael Toroama, es un antiguo dirigente del BRA.

*La designación de un moderador independiente y la mayor predisposición de parte de la comunidad internacional a involucrarse en la negociación podrían acelerar el diálogo en Bouganville*

Ante la incertidumbre provocada por el bloqueo de la negociación, **en septiembre de 2024 ambas partes anunciaron la elección como Moderador Independiente del diplomático neozelandés Jerry Mateparae**, antiguo Gobernador-General de Nueva Zelanda, jefe de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda y Comandante del Grupo de Supervisión de la Paz de Bougainville, y persona clave en la firma de un acuerdo de alto el fuego en 1998 que puso fin a las hostilidades. En 2001, se firmó el acuerdo de paz definitivo que contemplaba, entre otras cuestiones, la celebración de un referéndum de autodeterminación una vez se hubiera logrado el desarme del BRA y el establecimiento de un gobierno autónomo en Bougainville. Poco después de ser designado para el cargo, Mateparae se reunió con ambas partes y manifestó su optimismo sobre el futuro del proceso de negociación. **Ambas partes expresaron su convencimiento de que la designación acordada de un facilitador para el diálogo podría ser un poco de inflexión para la negociación, especialmente el Gobierno de Bouigainville,** que hacía tiempo que reivindicaba la participación de una tercera parte internacional en el diálogo. En 2020, el ex primer ministro de Irlanda, Bernie Ahern (1997-2008), que había presidido durante años la Comisión sobre el Referéndum de Bougainville, aceptó facilitar las negociaciones posteriores a la celebración del mismo, pero finalmente no acabó desempeñando ningún rol en el diálogo. Tras el nombramiento de Mateparae, Naciones Unidas declaró públicamente su disposición a seguir apoyando el proceso de negociación. Ambos Gobiernos decidieron que el mandato de Mateparae se prolongue hasta aproximadamente junio de 2025, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales en Bougainville, y también acordaron que su labor además de facilitar el diálogo entre ambos Gobiernos, también incluya la asistencia al Comité bicameral sobre Bougainville del Parlamento, la institución que, según el acuerdo de paz del 2001, debe decidir en última instancia sobre el estatus político de Bougainville.

También en el plano internacional, **otra cuestión que podría incidir positivamente en el proceso de negociación es la mayor disposición a involucrarse en el diálogo por parte de las dos principales organizaciones intergubernamentales en el Pacífico – el Foro de Islas del Pacífico (PIF) y el Melanesian Spearhead Group (MSG**)–, dos organizaciones que históricamente habían considerado el conflicto de Bougainville como un asunto interno de Papúa Nueva Guinea y que habían remarcado la primacía de la soberanía nacional de sus estados miembro por encima de otras consideraciones. En contraposición a las reticencias históricas a inmiscuirse en asuntos internos de sus estados miembro, en marzo de 2025 el secretario general del PIF, Baron Waqa, declaró la disposición de la organización a abordar la resolución del conflicto si se solicitara formalmente desde instancias oficiales en Bougainville, remitiendo cualquier decisión al respecto a la cumbre anual del PIF que se celebrará en las Islas Salomón en septiembre. Por otra parte, aún más explícitas fueron las declaraciones del director general del MSG, Ilan Kiloe, que también en 2025 declaró su disposición a brindar asistencia a Bougainville y señaló que el propósito y la razón por la que se estableció inicialmente el MSG fue promover los intereses colectivos de los países melanesios, ayudar a aquellos que aún no habían alcanzado la independencia y brindarles apoyo en su objetivo de convertirse en países independientes. El MSG se formalizó como una agrupación subregional en 2007 y está integrada por Fiji, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu y el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS) de Nueva Caledonia, que pretende la independencia de la isla. En 2024, Toroama ya anunció su intención de convertir

a Bougainville en miembro observador del MSG. A diferencia de otros territorios que fueron o todavía son parte del proceso de descolonización impulsado por Naciones Unidas (como Papúa Occidental en Indonesia, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Guam o Samoa Americana), la autodeterminación de Bougainville está establecida en la constitución de Papúa Nueva Guinea. En virtud del Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001 Papúa Nueva Guinea tiene la competencia de los asuntos exteriores del país, pero permite que el Gobierno Autónomo de Bougainville interactúe externamente con organizaciones regionales. Sin embargo, varios análisis han puesto de manifiesto la importancia que tiene Papúa Nueva Guinea en las organizaciones regionales del Pacífico, pues es el país más poblado de la región tras Australia (unos 11 millones de habitantes, más del doble que Nueva Zelanda y más que toda la población del resto de países de la región).

**Otro aspecto que puede incentivar y acelerar avances en el proceso de negociación son las elecciones generales que se celebrarán en 2025 en Bougainville**. En febrero, por ejemplo, el ministro para la Implementación de la Independencia de Bougainville, Ezekiel Masatt, declaró que ambos gobiernos se habían comprometido a resolver los asuntos procedimentales más controvertidos de la negociación antes de las mencionadas elecciones, y que para ello habían acordado reunirse las veces que hiciera falta. Algunas fuentes incluso apuntaron a la posibilidad de que algunas de dichas reuniones tuvieran lugar en Nueva Zelanda, país de origen del Moderador Independiente y lugar en el que a finales de los años 90 ya habían tenido lugar conversaciones preliminares que condujeron a la firma del acuerdo de paz en 2001. En este sentido, Masatt reiteró el acuerdo entre ambos gobiernos de que el mandato de Mateparae concluya antes de los comicios, idealmente a finales de junio.

Además de la fecha de los comicios, otros factores han puesto presión y trasladado urgencia al Ejecutivo de Papúa Nueva Guinea para desbloquear la negociación. En marzo de 2025, en una reunión con Jerry Mateparae y representantes de la comunidad internacional, Ishmael Toroama anticipó su intención de declarar la independencia de Bougainville el 1 de septiembre de 2027, pues considera que es coherente con la Hoja de Ruta para la Implementación de los Resultados del Referéndum (conocida como la "Hoja de Ruta de Wabag"), que establece el plazo para la declaración de independencia será "no antes de 2025 ni después de 2027". Poco antes de tal declaración de Toroama, el Foro de Consulta sobre la Independencia de Líderes de Bougainville emitieron un comunicado oficial advirtiendo que Papúa Nueva Guinea no tiene autoridad para vetar el resultado del referéndum y recomendaron el 1 de septiembre de 2027 como fecha de declaración de independencia. En marzo de 2025, Toroama también señaló que, en su opinión, el proceso de negociación de la independencia concluyó con el referéndum y que la moderación del diálogo por parte de Mateparae debería centrarse en la búsqueda de un acuerdo sobre la implementación del resultado del referéndum de independencia y sobre los términos de la nueva relación entre Bougainville y Papúa Nueva Guinea como dos estados soberanos independientes. Toroama instó a Marape a concluir el proceso de independencia durante la actual legislatura. En línea con la intención de Toroama de declarar la independencia de la isla en septiembre de 2027, en los últimos años, y especialmente en 2024, el Gobierno Autónomo de Bougainville ha ido tomando iniciativas para prepararse para una eventual independencia del país, como la presentación, en marzo de 2024, de un primer borrador de una Constitución de Bougainville por parte de Comisión de Planificación Constitucional de Bougainville.

A pesar de la designación de un moderador independiente, de la mayor predisposición de parte de la comunidad internacional a involucrarse la negociación y de los elementos de política doméstica que podrían acelerar el diálogo, algunos análisis también han destacado las dificultades que enfrenta tal proceso. El más importante de todos ellos, sin duda, es el desacuerdo profundo respecto del estatus político de la isla. Mientras que el Gobierno de Bougainville ha dejado claro que no aceptará ninguna otra opción que no sea la independencia –en el sentido de un nuevo país separado de Papúa Nueva Guinea--, Port Moresby ha insistido en la poca viabilidad económica de Bougainville como país independiente, señalando que actualmente la isla es altamente dependiente de las transferencias del Gobierno nacional y de países donantes y advirtiendo que la independencia económica de Bougainville debe anteceder a la independencia política. Aunque algunas voces señalan que reapertura de la mina de Panguna –una de las mayores del mundo, operada por la empresa multinacional Rio Tinto– podría garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Bougainville, otros análisis sostienen que tal opción entraña riesgos medioambientales y políticos –la actividad de dicha mina estuvo en el epicentro del conflicto armado en la isla–. El Gobierno de Papúa Nueva Guinea también ha insistido en el carácter no vinculante del referéndum de independencia de 2019 y ha recordado que es el Parlamento Nacional quien, según el acuerdo de paz de 2001, tiene la competencia para tomar cualquier decisión sobre el estatus político de Bougainville. Port Moresby también ha recalcado que, al contrario que otros casos del Pacífico, Bougainville no es una región pendiente de descolonización. Además de los desacuerdos políticos, también ha habido cuestiones de orden procedimental que obstaculizan el avance de la negociación, como la mayoría necesaria en el Parlamento para validar los resultados del referéndum de independencia. Mientras que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea considera que tal decisión debería ser aprobada por una mayoría cualificada de dos tercios, el Gobierno de Bougainville cree que debería ser ratificada por una mayoría simple.

A pesar de las dificultades, y aunque no parece realista la consecución de un acuerdo definitivo a corto plazo, ambas partes han expresado que las perspectivas a mediados de 2025 son más positivas y esperanzadoras de lo que eras a principios de 2024.

## 4.4. Nuevo diálogo Türkiye-PKK

**Desde 2024 se ha abierto en Türkiye una nueva oportunidad de paz en torno al longevo conflicto armado que desde 1984 ha enfrentado al Estado turco y al movimiento armado kurdo PKK**. Se trata de un conflicto armado que es expresión de la llamada cuestión kurda, una problemática que hace referencia a la discriminación y vulneraciones de derechos (culturales, lingüísticos y de representación política) que ha afrontado históricamente la población kurda de Türkiye y cuyos orígenes se remontan a la configuración de la república a principios del siglo XX. El conflicto armado entre Türkiye y el PKK, que en los últimos años ha sido de baja intensidad y ha tenido el norte de Iraq como principal escenario de la contienda, acumula un legado de impactos en seguridad humana (varias decenas de miles de fallecidos, centenares de miles de personas desplazadas internas, exilio y cárcel, tortura y violencia sexual, militarización y economía política de la violencia). Ahora, en un contexto interno y regional cambiante y afectado por numerosos retos, se ha iniciado un nuevo proceso de paz, en el que convergen elementos de oportunidad, pero también factores de riesgo.

**El nuevo proceso abierto es de naturaleza compleja y multiforme**. Recibe diferentes nombres, énfasis y lenguajes por diferentes actores: "Türkiye sin terrorismo", por la coalición gubernamental, frente a "proceso de paz y sociedad democrática" por el PKK, entre otras denominaciones. Informaciones periodísticas sitúan la existencia de conversaciones exploratorias no públicas entre el Estado y el PKK al menos desde abril de 2024. **En la esfera pública el proceso comenzó a desplegarse a partir de octubre de 2024, de la mano de diversos gestos de acercamiento y medidas, que fueron ampliándose** y que fueron acompañados de declaraciones al nivel de liderazgos políticos sobre el inicio de un nuevo periodo y la existencia de una oportunidad, aunque manteniendo denominaciones y focos diferentes. A partir de octubre y, mayormente, a partir de diciembre, se dio paso a la autorización de visitas familiares y políticas al líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, tras las cuales se fue socializando a la opinión pública la posición y visión del líder del PKK respecto al proceso y se fueron produciendo consultas entre la delegación del partido prokurdo DEM que visitaba a Öcalan y la mayoría de partidos políticos parlamentarios de Türkiye.[2]

En conjunto, se configuró un proceso de paz (con dimensión pública y no pública) que por ahora consiste en **conversaciones entre representantes del Gobierno y el líder del PKK; comunicación entre Öcalan y el PKK; visitas a Öcalan por la delegación del partido prokurdo DEM y socialización posterior a la opinión pública por parte de la delegación; y rondas de reuniones bilaterales entre la delegación del DEM y la gran mayoría de partidos políticos parlamentarios de Türkiye** –incluyendo el gubernamental AKP y su socio MHP. Además, está en debate la creación de una comisión parlamentaria que aborde cuestiones relativas al proceso, que aportaría un espacio coral más institucionalizado. La delegación del DEM se ha reunido también con actores kurdos de Iraq y de Siria. Asimismo, esta nueva iniciativa de paz mantiene interrelación con el diálogo desplegado, desde la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad,[3]entre el Gobierno de transición sirio y las SDF (coalición opositora a Al-Assad apoyada por EEUU en la lucha contra ISIS y encabezada por las milicias kurdas YPG/YPJ, con vínculos con el PKK y control territorial en el noreste de Siria) sobre el encaje kurdo en la nueva Siria. **En la nueva iniciativa en Türkiye convergen diversos elementos de oportunidad**. Por una parte, el nuevo proceso no surge en un vacío, sino que cuenta con aprendizajes acumulados de las experiencias previas, incluyendo las más recientes (diálogo de Oslo 2008-2011 y el proceso de 2013-2015). Converge en el proceso una aparente voluntad de las partes de llevar a cabo un proceso negociador que genere resultados, aunque –como se señala más adelante– está atravesada por motivaciones diferentes y factores de incertidumbre y riesgo.

Además, **el proceso está desplegándose y avanzando, generando ya algunos primeros resultados significativos en lo que está siendo el foco inicial, las armas**. Destaca el comunicado de Öcalan del 27 de febrero de 2025 en que llama al PKK a convocar un congreso, deponer las armas y disolverse, en el marco de una visión de solución basada en la paz, una sociedad democrática y apertura del espacio político. El PKK respondió con un comunicado el 1 de marzo en el que declararon un alto el fuego unilateral y respaldaron en su totalidad el mensaje de Öcalan. A principios de mayo, tras la celebración de su 12º congreso (5-7 mayo), el PKK anunció la finalización de la lucha armada y la disolución de la organización. Es decir, el proceso ha generado ya el silencio de las armas, lo que supone en sí un hito. El esquema de comenzar con el fin de las armas, presumiblemente por presión e interés de Türkiye, en todo caso saca de la ecuación el que ha sido el principal argumento de Türkiye para reprimir a actores políticos y sociales kurdos: su supuesta vinculación a un PKK considerado terrorista. Por su parte, el PKK llevaba décadas defendiendo una solución negociada al conflicto. En los últimos años,

2 Para una cronología detallada de los pasos entre octubre de 2024 y abril de 2025, véase "Türkiye-PKK" en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz*, enero de 2025 y Türkiye-PKK" en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz*, abril de 2025. Véase también el resumen sobre Türkiye (PKK) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

3 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados) y "¿Una oportunidad para la paz en Siria?: perspectivas ante una frágil transición" en este capítulo.

el grupo se ha visto afectado por una mayor presión militar de Türkiye, de la mano de factores como el uso intensivo de drones, que le habría debilitado y llevado a un repliegue y estrategias defensivas. Potencialmente la disolución del PKK deja sin razones a la lucha contra el terrorismo como vía de abordaje de la cuestión kurda y podría fortalecer la esfera política y social y a los actores políticos kurdos –especialmente si desemboca en liberación de figuras políticas kurdas en prisión–. No obstante, el proceso de paz coexiste con dinámicas de autoritarismo y represión política en Türkiye.

**Otro elemento de oportunidad radica en la falta de disensos internos en el PKK a su decisión histórica de finalización de la lucha armada y disolución**, así como en la amplia mayoría de partidos políticos de Türkiye que apoyan el proceso, incluyendo el gobernante AKP y su socio ultranacionalista turco MHP. Otro elemento positivo, interrelacionado, es la atención puesta en los actores parlamentarios y en el potencial papel que puede desempeñar el Parlamento a través de una futura comisión. En cuanto a la participación de mujeres, destaca el inicio de reuniones específicas entre mujeres representantes de los distintos partidos políticos que apoyan la iniciativa de paz. El foco histórico del movimiento kurdo en los derechos de las mujeres podría tener repercusiones positivas en el proceso, como esta nueva dinámica de reuniones.

No obstante, **los elementos riesgo y de incerteza son relevantes. Aún está por ver cómo se gestionará el desarme, desmovilización y reintegración y una posible ley de amnistía y si se abordarán, y con qué grado de alcance, demandas kurdas** de derechos culturales, lingüísticos, garantías de participación política y una mayor descentralización administrativa –al menos municipal. Además, la opacidad y falta de transparencia –en parte motivada para fortalecer el proceso frente a filtraciones y ataques– genera una elevada incertidumbre, incluso sobre si las partes disponen de un marco negociador/hoja de ruta consensuado o no. Por otra parte, **la dinámica de represión interna en Türkiye y los riesgos de autoritarismo son otro factor en contra**, en tanto que pueden limitar el margen de decisión sobre reformas y derechos –relativos a la cuestión kurda y al conjunto del país– y alejan al principal partido opositor, el CHP, y sus bases. En ese sentido, algunos análisis han señalado que entre los factores que operan en la nueva iniciativa estaría la pérdida de apoyo electoral del AKP –con el CHP como primera fuerza en las elecciones municipales de 2024– y los intentos de la coalición gubernamental de erosionar una cierta cooperación electoral entre el principal partido opositor turco, el CHP, y el partido prokurdo DEM. Además, a través de la iniciativa, el AKP podría intentar lograr apoyo kurdo a una futura modificación de la Constitución que recogiese algunas demandas kurdas pero que también modificase el límite de mandatos presenciales y abriese la puerta a la reelección de Erdogan en los próximos comicios previstos para 2028 –o buscar apoyo kurdo en un eventual adelanto electoral. La iniciativa de paz transcurre en paralelo a una fuerte represión del régimen contra el CHP, incluyendo destitución de varios alcaldes y detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y principal rival de Erdogan para las presidenciales, que desencadenó protestas masivas. Esta dinámica se añade a la represión histórica que ha afrontado el movimiento kurdo para el ejercicio de sus libertades civiles y políticas y a la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas pacifistas, feministas y LGTBIQ+, entre otros.

**La volatilidad regional y el factor kurdo sirio generan también incertidumbre**. Ante el complejo tablero regional de los últimos años, especialmente desde la crisis en Gaza y la intensificación de disputas regionales (crisis Israel-Irán, caída de Bashar al-Assad en Siria, tensiones Türkiye-Israel, entre otras), Türkiye ha priorizado un enfoque de reducir riesgos y amenazas y buscar proyección exterior política, comercial y militar. Así, como parte de una visión de priorizar intereses nacionales más amplios en un Oriente Medio en reconfiguración, Ankara negocia con el PKK y acepta las negociaciones en marcha entre el Gobierno sirio de transición y las SDF sobre el encaje de los combatientes kurdos de Siria y el futuro encaje kurdo en la nueva Siria.[4] Aparentemente Türkiye estaría en una posición de cautela y de interlocución con las SDF, en contraste con la línea roja que ha supuesto la existencia de la región autónoma kurda de Siria (DAANES, por sus siglas en inglés, popularmente conocida como Rojava) para Türkiye en estos años. No obstante, la volatilidad en Oriente Medio y la complejidad e incerteza en torno al proceso Damasco-SDF puede ralentizar el propio proceso de paz en Türkiye, y cómo evolucione este último también podría influir en el primero.

Otro factor de incerteza es el grado de apropiación y transformación. Por parte del movimiento kurdo se han desplegado iniciativas de socialización del proceso con sus bases, para favorecer participacióin y apoyo, pero está por ver si en el conjunto de Türkiye se avanzará hacia vías de participación más amplias, que permitan mayor sintonía social con el reto abierto y que acompañen el proceso negociador con vías complementarias de construcción de paz, incluyendo en lo relativo a transformación de la imagen del enemigo, cohesión social, verdad, memoria, justicia y reparación, entre otros.

En conclusión, se ha abierto un nuevo proceso negociador en Türkiye en torno al histórico conflicto armado entre el Estado y el PKK, con elementos que lo fortalecen, pero también con factores de riesgo e incertidumbre de dimensión interna y regional. Para que el proceso vaya más allá del silencio de las armas y de acomodo de intereses en un formato de paz negativa en un contexto de tendencia de autoritarismo, y, en cambio, se puedan abordar cuestiones de fondo relativas a la cuestión kurda y que revierta en una mayor democratización y apertura política se requiere de esfuerzos de acompañamiento de la iniciativa y de vías de participación y movilización que empujen hacia ese horizonte.

4 Ibid.

## 4.5. ¿Una oportunidad para la paz en Siria?: perspectivas ante una frágil transición

Siria afronta una coyuntura histórica. Después de más de una década de conflicto armado, la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y el fin del gobierno autoritario instaurado por su padre hace más de medio siglo han abierto una nueva etapa. El escenario es complejo y está pleno de retos, internos y externos, en un entorno regional convulso y volátil. Pero es indudable que **el nuevo contexto ha alentado esperanzas y expectativas de cambio en buena parte de la población, que aspira a dejar atrás un ciclo de violencia devastador y a imaginar las posibilidades de una nueva Siria**. "Por primera vez en décadas tenemos la oportunidad de dejar de ser súbditos y convertirnos en ciudadanos de nuestro país", destacaba un analista sirio. Tras el derrocamiento del gobierno y la asunción de las nuevas autoridades, la evolución de acontecimientos en los primeros meses de 2025 refuerza el diagnóstico de que la transición es frágil y que los análisis prospectivos deben recoger matices e incertidumbres.

Desde el cambio de régimen, **uno de los principales ejes de preocupación tiene que ver con la evolución de la transición política, su grado de inclusividad –en un país multiétnico y multiconfesional y fragmentado por años de guerra– y el papel que desempeñarán las nuevas autoridades sirias en esta etapa.** El líder de las fuerzas opositoras que derrocaron a al-Assad, Ahmed al-Sharaa, se ha puesto a la cabeza del proceso de transición y ha impulsado una serie de medidas con las que, entre otras cosas, ha intentado apaciguar los recelos que dentro y fuera del país generaba su organización, Hayat al-Sham (HTS), y su propia figura, por sus pasados vínculos con al-Qaeda. En sus primeras declaraciones públicas, las nuevas autoridades apelaron a la unidad y a principios de justicia, libertad y dignidad, intentando conectar así con las aspiraciones de la revolución siria. Las nuevas autoridades consideraron que el marco negociador promovido sin éxito durante más de una década por la ONU y anclado a la resolución 2254 (2015) estaba "obsoleto" –fue concebido para mediar entre el régimen de al-Assad y la oposición– y diseñaron su propia hoja de ruta. En los meses siguientes, las políticas y procesos desplegados han tenido valoraciones dispares, con algunos elementos positivos y otros que han expuesto la complejidad y riesgos del nuevo escenario.

**Uno de los primeros hitos fue la celebración de una conferencia de diálogo nacional**, que reunió a unos 900 participantes a finales de febrero. En el encuentro de dos días –que estuvo precedido en las dos semanas previas por consultas a nivel local en distintos puntos del país– las personas participantes abordaron temas como la futura Constitución, libertades o los retos de la economía. El diálogo tuvo una dimensión simbólica –una reunión de esta naturaleza en Damasco era impensable tres meses atrás– y desembocó en una declaración con un compromiso general en torno a la unidad, igualdad, reformas institucionales y garantías de derechos, con menciones específicas a la necesidad de proteger las libertades de pensamiento y expresión o la importancia de incorporar a la sociedad civil en la definición de la Siria post-Assad. El diálogo nacional, sin embargo, también despertó recelos y preocupación por no abordar algunos temas clave, por la falta de claridad sobre de qué manera se implementarían sus resultados y por cuestiones de representatividad y procedimiento –por el tiempo limitado para la discusión, su precipitación (muchas invitaciones se enviaron a última hora), o la opacidad sobre los criterios para escoger a las personas participantes e integrantes en el comité de preparación, entre otros factores. Algunos observadores enfatizaron que el espacio de diálogo parecía formar parte de un "checklist" que las nuevas autoridades debían cumplir de cara al exterior –en especial ante actores occidentales–, mientras que otros valoraron que, pese a sus imperfecciones, la iniciativa ofrecía una posibilidad para avanzar en las discusiones sobre una nueva Siria.[5] Otras voces subrayaron que las autoridades deberían construir a partir de esta experiencia y dar continuidad al diálogo en pro de la reconciliación.[6]

**En marzo se produjeron otros dos hitos. A mediados de mes se publicó una declaración constitucional que definió las prerrogativas del nuevo gobierno y el sistema que estará vigente durante el período de transición**, previsto para cinco años hasta la adopción de una nueva Carta Fundamental y la celebración de elecciones. Elaborada por un comité de siete expertos legales designado por al-Sharaa, la declaración garantiza la separación de poderes, la libertad de credo, la igualdad entre los ciudadanos sin discriminación en base de raza, religión o género y que el Estado garantizará derechos y libertades fundamentales. En paralelo, sin embargo, el texto también consagra un sistema fuertemente presidencialista, que –advierten analistas– entraña una propensión al autoritarismo: el presidente designa un tercio de los miembros del parlamento de transición, designa al comité encargado de nombrar los otros dos tercios, nombra a vicepresidentes y ministros y también a los miembros de la Corte Suprema Constitucional.[7]

5 Ibrahim al-Assil, The national dialogue in Syria: A step forward or a concerned trajectory?, Middle East Institute, 5 de marzo de 2025; Justin Salhani, Key takeaways from Syria's National Dialogue conference, Al-Jazeera, 26 de febrero de 2025.

6 Qutaiba Idlbi, Charles Lister y Marie Forestier, Reimagining Syria. A Roadmap for Peace and Prosperity Beyond Assad, Atlantic Council, Middle East Institute, European Institute of Peace, marzo de 2025.

7 International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power, Q&A Middle East ¬North Africa, 25 de abril de 2025.

**Bajo este nuevo marco legal, a finales de marzo se anunció el nuevo gobierno de transición** que reemplazó al gobierno en funciones que había asumido en diciembre de 2024 justo después del derrocamiento de al-Assad. El gabinete de 23 integrantes es diverso e incluye un número importante de figuras independientes con trayectorias reconocidas, tecnócratas y personas de la sociedad civil. Nueve son miembros de las principales minorías del país, sin afiliación a grupos políticos. No obstante, HTS concentra en sus manos los cargos de mayor poder (Exteriores, Defensa, Interior, Justicia). El anuncio del nuevo gobierno motivó reacciones variadas dentro y fuera del país y provocó recelos en grupos como las fuerzas kurdas, que lideran las SDF y controlan el noreste de Siria. Después de que el líder de las SDF y al-Sharaa firmaran un acuerdo en marzo para la integración de las fuerzas kurdas en las instituciones del Estado, las SDF rechazaron la declaración constitucional por no reconocer explícitamente los derechos políticos, culturales y lingüísticos de las minorías étnicas y religiosas de Siria. En el nuevo gabinete, la figura kurda nombrada como ministro de Educación no tiene relación política con las SDF. Previsiblemente, las negociaciones entre el gobierno central y las SDF continuarán navegando entre obstáculos, influidas también por la marcha del diálogo entre Türkiye y el PKK.[8]

**Otra de las críticas al nuevo gobierno sirio apuntó al déficit de inclusión desde una perspectiva de género** por la designación de tan solo una sola mujer en el gabinete. El nombramiento de Hind Kabawat como ministra del Trabajo y Asuntos Sociales fue considerado por algunas voces como reflejo de una aproximación *tokenística*. La propia Kabawat –conocida opositora del régimen de al-Assad, activista por los derechos de las mujeres, integrante de la minoría cristiana y experta en resolución de conflictos– reconoció que había presionado sin éxito por la presencia de más ministras, pero que existía el compromiso de nombrar a más mujeres en puestos de alto nivel.[9] Según Kabawat, al-Sharaa es consciente de que no puede gobernar solo, aunque está por verse si eso podría ser un aliciente para trascender el compromiso retórico en materia de inclusión de las mujeres. Tanto el diálogo nacional como las comisiones preparatorias de éste y de la declaración constitucional contaron con la participación de mujeres –25% de las participantes en el primer caso, dos de las siete personas integrantes en lo que respecta a las comisiones–, pero las aspiraciones de las mujeres sirias trascienden la fijación de una cuota mínima. Desde antes de la caída de al-Assad, activistas feministas sirias –organizadas en la diáspora y dentro del país– vienen exigiendo tener un papel determinante en la definición del futuro de Siria[10] y tras la caída del régimen algunas han expuesto con detalle las prioridades que, desde su punto de vista, son claves para la fase de transición.[11] Se espera que las mujeres sirias continúen presionando y haciendo incidencia en esta línea. Así lo atestiguaba, entre otros, el trabajo del Consejo Asesor de Mujeres Sirias –promovido en 2016 por el Enviado Especial de la ONU para Siria– que en 2025 celebró su primera reunión en territorio sirio y aprovechó la ocasión para interpelar a las nuevas autoridades sobre el rol de la sociedad civil y las garantías para la participación política de las mujeres. La designación del parlamento provisional será, previsiblemente, una prueba más sobre las políticas de inclusión en la nueva Siria.

***La nueva coyuntura ha alentado expectativas de cambio en buena parte de la población, que aspira a dejar atrás un ciclo de violencia devastador y a imaginar las posibilidades de una nueva Siria***

**Otro de los grandes ejes de preocupación tiene que ver con cómo dejar atrás las dinámicas de violencia que han impactado el país en la última década, cómo afrontar los retos de seguridad y avanzar en paralelo en procesos de rendición de cuentas que contribuyan a la reconciliación**. Los hechos de violencia que afectaron principalmente a la comunidad alauí en marzo de 2025 constituyeron un dramático llamado de atención sobre los riesgos en este ámbito. El rápido establecimiento de una comisión de investigación por parte del gobierno de al-Sharaa fue bien valorado inicialmente, pero tras su puesta en marcha la iniciativa ha sido objeto de críticas de falta de transparencia e insuficiente colaboración con organizaciones de derechos humanos. Otras iniciativas impulsadas por las nuevas autoridades en este ámbito también han motivado valoraciones mixtas o con matices. En mayo, a través de sendos decretos presidenciales, se establecieron la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y la Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas, valoradas como un paso relevante en el reconocimiento de las reivindicaciones de las víctimas y sus familias, como una señal de los esfuerzos por responder a las extendidas vulneraciones a los derechos cometidas durante el conflicto armado en Siria y como una oportunidad para emprender un proceso nacional de verdad, sanación y rendición de cuentas.[12] Sin embargo, voces expertas señalaron su inquietud por las limitaciones del mandato de estas instancias. En el caso de la Comisión Nacional de Justicia Transicional, se ha criticado su foco solo en las vulneraciones cometidas

8 Véase "Nuevo diálogo Türkiye-PKK" en este capítulo.
9 Hélène Sallon, Hind Kabawat, the only woman in Syria's transitional government: 'Al-Sharaa has a vision, and he knows he cannot govern alone', Le Monde, 2 de abril de 2025.
10 Ruth Michaelson, 'We've proved we can do anything': the Syrian women who want a say in running the country, The Guardian, 5 de enero de 2025.
11 Syrian Women's Political Movement, Press Release on the Syrian Women's Political Movement's Strategic Vision to Achieve a Free and Democratic Syria, 12 de diciembre de 2025.
12 ICJT, ICTJ Welcomes Establishment of Syria's New National Commissions for Transitional Justice and the Missing, 22 de mayo de 2025.

por el régimen de al-Assad, excluyendo así a víctimas de abusos por otros actores armados. Las nuevas autoridades sirias han sido interpeladas, por tanto, para impulsar un proceso de justicia transicional inclusivo, priorizar la participación genuina de las víctimas en el trabajo de estas comisiones, y construir sobre la base del enorme trabajo desarrollado durante más de una década por grupos de la sociedad civil, abogados y familias de víctimas en la documentación de abusos y búsqueda de justicia.[13] Labor que, entre otras cosas, ha desembocado en el establecimiento en 2023 por parte de Asamblea General de la ONU de la Institución Independiente para las Personas Desaparecidas en Siria.[14] Pasos de este tipo parecen claves para cumplir con las expectativas de la población sobre una justicia transicional en Siria.

**Un tercer eje de preocupación tiene que ver con las condiciones materiales de vida en el país, con una situación económica gravemente deteriorada por los impactos del conflicto**. Según OCHA, las necesidades humanitarias eran inmensas para una población donde el 90% de la población vive en condiciones de pobreza, cerca de la mitad afronta inseguridad alimentaria severa y millones de personas padecen las consecuencias del desplazamiento forzado por la violencia. Pese a esta crítica situación y a las incertezas de la situación política y de seguridad, diversos informes constatan que **un gran número de personas desplazadas dentro del país o que vivían fuera como refugiadas están regresando a sus lugares de origen en la Siria post-Assad.** Estimaciones de ACNUR indican que en los primeros meses de 2025 1,7 millones de personas (entre ellas medio millón de refugiadas) habían regresado a sus hogares y que esa cifra podría duplicarse para finales de año. Estos retornos obedecen a múltiples motivaciones, pero reflejan en parte las expectativas de la población siria sobre el nuevo escenario en el país. En este ámbito será clave mantener la atención para evitar los retornos forzados –antes de la caída del régimen, diversos países se habían mostrado dispuestos a acuerdos con al-Assad para favorecer el regreso de población refugiada siria– y atender a las ingentes necesidades económicas, de reconstrucción y servicios básicos en una Siria devastada por los años de guerra. En esta ecuación, desde diversos ámbitos se ha destacado la relevancia del levantamiento de sanciones que databan de la era al-Assad y que se han mantenido por las suspicacias ante las nuevas autoridades sirias. En este sentido, los anuncios en mayo de EEUU y la UE sobre el levantamiento de sanciones económicas –que seguirán condicionadas a la evolución del proceso político– abrían una ventana de oportunidad en este ámbito. Especialmente llamativo fue el anuncio en el caso de EEUU, tras una sorpresiva e inédita reunión en Arabia Saudita entre Donald Trump y al Sharaa (la primera entre presidentes de ambos países en 25 años), que escenificó el reconocimiento a un líder que hasta hace pocos meses estaba en las listas de terroristas de Washington.

La evolución de la situación en Siria no dependerá solo de los ejes analizados hasta ahora. Seguirá siendo determinante la gestión de los temas de gobernanza, la manera en que se sorteen las disputas políticas y territoriales, el afrontamiento a los retos de seguridad y al desafío de supongan actores armados –pro-Assad, ISIS, entre otros–, las repercusiones de las ofensivas de Israel en el Golán y sus agresivos intentos de desestabilización –incluyendo a través de la instrumentalización de minorías como la drusa–, las posibles injerencias de otros actores externos, o las consecuencias de las tensiones y conflictos en la región, entre otros múltiples factores. A corto y medio plazo, no obstante, muchísimos sirios y sirias parecen mantener la esperanza en que pese a los riesgos e incertezas, vale la pena creer en que otra Siria es posible y que es imperativo desplegar esfuerzos para evitar una nueva escalada de violencia y confrontación.

13 Ibid y Human Rights Watch, Syria's Transitional Justice Commission: A Missed Opportunity for Victim-Led Justice, 19 de mayo de 2025.

14 Más información en la web de la Independent Institution on Missing Persons in Syria (IIMP).